

## INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO VARELA CID

**Opinión del señor diputado acerca del proyecto  
de ley sobre régimen regulatorio del costo  
de los procesos iniciales**

En este proyecto de ley hay dos graves errores. Quiero referirme a ellos y pedir al presidente de la comisión que tenga a bien rectificarlos, aunque esto obligue a que el proyecto vuelva al Senado.

En primer término me quiero referir a la parte final del artículo 7º. A las verificaciones de créditos como las verificaciones tardías, siguen calculándose los aranceles profesionales, los honorarios y las costas tomándose como monto del proceso principal el del propio crédito insinuado y verificado. Pongamos un ejemplo para que esto quede más claro: el monto insinuado, cuando el Banco Central se tuvo que hacer cargo de la liquidación del Centro Financiero de Córdoba, era de 150 millones de dólares; el monto verificado fue efectivamente de 150 millones de dólares y sobre eso después el juez generoso, reguló el máximo del máximo, o sea el 30 % para el abogado del síndico que no había desempeñado tarea alguna, y le reguló 45 millones de dólares de honorarios solamente al abogado del síndico que vino a hacer una suma que ya estaba hecha. Lo realizable por todo concepto era un departamento en un primer piso de aproximadamente unos 128 mil pesos; sobre eso deberían haberse calculado los honorarios. No solamente los honorarios del abogado del síndico que vino a hacer una verificación tardía sino que de todos los abogados que participaron de toda la liquidación del Centro Financiero. De haber sido así, la economía de juicios hubiera sido realmente extraordinaria. La desesperación de los abogados y de los peritos de compartir el botín, era porque justamente estábamos hablando de que se calculaba siempre el porcentaje sobre crédito insinuado y verificado, no sobre lo realizable. No habría participado y ni hubiera habido la cantidad de incidentes que hubo en ese juicio si no hubieran sabido todos estos abogados inescrupulosos que siempre se les regulaba honorarios en base a una cifra abstracta de 150 millones de dólares que era lo

que había tenido que pagar el Banco Central por toda la cantidad de depósitos, muchos de ellos truchos, porque todos sabemos perfectamente bien que está absolutamente demostrado en el expediente y denunciado por el propio presidente del Centro Financiero que muchas personas hicieron depósitos de 1 millón de dólares, que eso fue lo que se robó el presidente del Centro Financiero; pero en realidad figuraba en la boleta de depósito que esos depósitos eran de 8 millones de dólares. Esos 8 millones de dólares los tuvo que pagar el Banco Central; por eso la suma asciende después a 150 millones de dólares. Pero eso nada tiene que ver con la liquidación del Centro Financiero para regular honorarios sobre lo que el Centro Financiero le había robado al Banco Central. Eso sirvió para que después nuevos abogados, nuevos peritos, nuevos contadores inflaran honorarios profesionales sobre esa cifra abstracta de lo que ya le habían robado al Banco Central. Este criterio erróneo sigue en esta nueva ley lo que va a seguir impidiendo que el Banco Central pueda liquidar una entidad financiera, aunque si bien estos topes se bajan al 25 % se sigue calculando los honorarios sobre lo insinuado y no sobre lo realizado. Por consiguiente, yo propongo que se cambie el texto del artículo 7º en la última línea, donde dice: del proceso principal del propio crédito insinuado y verificado, pues debería hablarse de "propio crédito realizable".

Con respecto al artículo 9º vemos otro gravísimo error. Actualmente los peritos y los abogados les cobran al solvente, no importa si es la parte condenada en el juicio o la parte no condenada en el juicio. Esto es lo que permite la enorme cantidad de aventuras judiciales. Abogados inescrupulosos, en sociedad con un insolvente, inician una aventura judicial sabiendo que la van a perder, piden beneficio de litigar sin gastos (eso va por cuerda separada), el juicio sigue adelante. No les importa; total, cuando hay sentencia ellos cobran los honorarios; inflar una demanda de 1 millón de pesos es relativamente fácil a un mediano industrial, y después "robarle" 125 mil pesos producto de que ahora

se reduce a la mitad. Yo propongo el texto que diga: "Los peritos intervinientes no podrán reclamar a la parte no condenada las costas". De esa manera nosotros podremos garantizar a la sociedad, a los pequeños y medianos industriales, que no va a haber aventuras

judiciales porque a la parte no condenada, es decir la parte que demuestra en el juicio que lo reclamado era injusto o una aventura judicial, no se le va a poder, después, reclamar honorarios ni de los abogados, ni de los peritos.